

“Impulso País: Crecer para Incluir”: propuestas económicas del PPD al programa presidencial de Jeannette Jara

La candidatura de Jeannette Jara ha señalado su intención de redefinir su propuesta programática para que esta represente al conjunto de la centroizquierda y, ojalá, más allá de ella; incluyendo a la amplia franja ciudadana que no se identifica con los partidos políticos. A la vez, ha subrayado la importancia de centrar la propuesta en temas de amplio consenso ciudadano y político en la centroizquierda.

En ese marco, **este documento de la comisión económica del Partido Por la Democracia (PPD) busca contribuir al robustecimiento de las propuestas programáticas en materia económico-social**, con la convicción de que el progresismo es el sector más capacitado para liderar un gobierno que combine crecimiento, productividad y bienestar social para todos y todas.

A continuación, nos referiremos exclusivamente a cuatro dimensiones claves para el crecimiento económico (si bien no las únicas) que estaban presentes en el programa original de la candidata y que estimamos necesario diseñar con mejor precisión; ello sin desconocer la central importancia de profundizar en las propuestas para atender las necesidades sociales y de seguridad de la población, que han sido subrayadas por Jeannette Jara y que ocuparon una parte importante de las propuestas programáticas que hicieron las otras candidaturas que compitieron en las primarias. Destacamos que las siguientes propuestas provienen del trabajo programático de la campaña de Carolina Tohá, aunque este cubrió muchos y muy importantes temas adicionales a los aquí considerados.

El contexto global: la demanda por gobernabilidad.

El crecimiento exportador es la piedra angular del despliegue productivo que se sugiere en este documento. Sin embargo, lo hacemos conscientes de que ya no existe el dinámico comportamiento del comercio global que tuvimos durante el auge de la globalización. El mundo enfrenta crecientes conflictos. Las tensiones geopolíticas y sus conflictos, no tiene visos de ser resueltos; en Ucrania, Gaza-Irán y potencialmente en el Mar del sur de China. EE. UU. y Europa insisten en aumentar el gasto en defensa, mientras China lo eleva más moderadamente en una óptica de contención. Esto significará que la batalla por la dominancia en las tecnologías de punta se tornará difícil para el

oeste, lo que empeorará los conflictos comerciales ya presentes y propenderá a un comercio internacional más friccionado y sin reglas (o solo la del más fuerte), siendo un severo obstáculo a nuestro esfuerzo exportador. Además, el financiamiento para los bienes públicos globales (clima, salud, cooperación para el desarrollo, regulación acordada de los desafíos que traerá la IA, entre otros) será muy escaso y la gobernanza global se debilitará aún más.

En este cuadro es fundamental buscar amplios espacios de acuerdos internos y deponer batallas ideológicas. Jeannette Jara tiene que y puede convocar a estos amplios, a diferencia de los proyectos sobre ideologizados de restauración conservadora, que no son más que el sueño de una oligarquía miope. Debemos presentar al país la necesidad de dar un salto cualitativo en nuestro modo de hacer las cosas, en ámbitos que trascienden lo económico (objeto de estas páginas). Ello incluye una decidida batalla contra el crimen y la corrupción, una sociedad que establezca en su centro los derechos y deberes como parte del contrato social, así como un gran paso en el cumplimiento de las reglas, incluyendo las obligaciones tributarias, el combate a los abusos y a las prácticas contra la justa competencia en los mercados; como también un Estado más eficiente, un mercado laboral más formalizado y flexible y que integre decididamente a la mujer y una mejor provisión de derechos sociales, particularmente en proveer una educación de calidad y servicios de salud oportunos. Pero todo esto descansa en una mejor política; nada de ello posible sin acuerdos políticos amplios.

El único antídoto contra el inmovilismo es forjar acuerdos transversales. No debemos olvidar que, a fin de cuentas, la competitividad es sistémica y su mejoría supone actuar sobre nuestra gobernanza, lugar desde el que surgen las medidas específicas que se requieren, algunas de las cuales se mencionan a continuación, en los siguientes ejes:

1. Un nuevo paradigma para el desarrollo sostenible de Chile.

Si bien la propuesta inicial de Jeannette Jara implicaba un modelo de desarrollo guiado por la demanda interna; la propia candidata ya ha señalado la importancia de fortalecer el desarrollo exportador y lo crucial de la colaboración público-privada para lograrlo. Lo anterior es relevante, dado que la experiencia nacional e internacional de avanzar en base a la demanda interna se ha mostrado incapaz de lograr resultados, más aún, normalmente ha derivado en hiper inflación con sus negativas consecuencias especialmente graves para las familias más pobres. De hecho, el impulso (o contención) de la demanda interna es más una política de estabilización de

corto plazo, que una estrategia de desarrollo de mediano y largo plazo; ya que no apunta a modificar la capacidad productiva de nuestra economía que es lo que demanda el desarrollo sostenible.

Coincidimos en que Chile enfrenta hoy el desafío ineludible de retomar una senda de crecimiento económico sostenido si aspira a recuperar su trayectoria hacia el desarrollo. Durante los primeros 20 años del retorno a la democracia, el país mostró avances importantes, con un crecimiento promedio anual del PIB del 5.3% entre 1990 y 2010; mientras que en la última década esta cifra fue de solo el 2%. Actualmente, las proyecciones del PIB tendencial, es decir, el crecimiento potencial de la economía en el largo plazo, se ubican en torno al 2% anual según estimaciones del Banco Central de Chile. Esta cifra representa una importante disminución respecto de décadas anteriores y plantea un serio desafío para mejorar la vida de las familias chilenas.

Así, proponemos **un nuevo paradigma para el desarrollo** basado en un acuerdo amplio de la sociedad, para retomar la capacidad exportadora de largo plazo. Este esfuerzo adicionalmente debe contar con más trabajadores calificados, más inversión sostenida en el tiempo y un salto en el esfuerzo de innovación para incorporar nuevos valores agregados a nuestros productos. Solo así podremos aprovechar las ricas oportunidades que se nos abren como país. El desafío clave entonces es estimular la renovación productiva: con más tecnología, más conocimiento, trabajadores y trabajadoras más calificados e innovación en todos los niveles, desde la infraestructura pública hasta el trabajador independiente. Chile siempre ha sido eminentemente un país productor y exportador de recursos naturales y materias primas que el mundo ha demandado; como salitre, cobre, alimentos y litio. En este nuevo ciclo global, Chile posee recursos naturales cuya relevancia se ha multiplicado ante los desafíos del cambio climático. Invertir en su desarrollo y en innovación para fortalecer su cadena de valor y su productividad nos ofrece una enorme oportunidad de progreso. A ello se suma la posibilidad de fortalecer nuestra exportación de servicios, vinculados a nuestros recursos naturales y también los de carácter digital cuya producción requiere factores disponibles en el país. Chile tiene la posibilidad de convertirse en un centro de desarrollo sostenible, verde y digital, capaz de diversificar nuestra economía, potenciar la equidad territorial y duplicar el ingreso por persona para el año 2040.

Para ello impulsaremos un cambio de paradigma que consiste en **complementar el funcionamiento del mercado con una intencionalidad**

política explícita de identificar nuevas oportunidades, desarrollar ventajas comparativas, conectar eslabones productivos y estimular la renovación del conocimiento en la economía. Esta decisión política debe surgir desde el Estado, con el liderazgo del gobierno central y el acuerdo del parlamento, pero convocando a múltiples redes de colaboración que son fundamentales para todas las actividades específicas que le dan contenido, en las cuales participen empresas, universidades e institutos técnicos, organismos públicos, sociedad civil, trabajadores, emprendedores, entre otros.

El futuro sostenible que anhelamos requiere que muchos actores concuerden y colaboren en torno a objetivos comunes. Por eso, crearemos un **Consejo de Diálogo Social**; para pactar entre trabajadores, academia, empresarios y la sociedad civil una hoja de ruta para alcanzar el desarrollo, vía la creación de nuevas industrias y potenciando las existentes, construyendo las medidas que se deben aplicar para lograrlo y que comprometa la colaboración de todos los actores tras este esfuerzo.

Este Pacto contemplará una “**Agenda por un Futuro Verde**” para acelerar la transición energética en los sectores intensivos en carbono (transporte, industria, minería) con incentivos, plazos y garantías laborales.

Asimismo, promoveremos la creación de **Centros Colaborativos** en torno a nuestras riquezas naturales, ubicados en el territorio donde se emplazan, para fortalecer la innovación y los vínculos productivos de los recursos con su territorio y con el resto del aparato productivo. Ello creará nuevas oportunidades con mejores condiciones de trabajo, desarrollo de nuevas habilidades y beneficios concretos. Lo anterior se complementará con un **fortalecimiento de las Estrategias Regionales de Desarrollo**, que también se elaborarán de manera participativa.

En una economía colaborativa, las **empresas medianas tienen un rol clave**, ya que son transmisoras de conocimiento entre las empresas grandes y las pequeñas. Cuando las empresas medianas más productivas crecen, no sólo desarrollan su potencial, sino que aumentan la competencia, presionan a las empresas más grandes y generan más alternativas a los consumidores.

Todo lo anterior redundará en la creación de empleos de calidad a lo largo y ancho del país. Lograrlo requerirá impulsar muchas políticas públicas y un fuerte compromiso de todos los actores con la estrategia convenida.

En este marco el sistema tributario debe ser capaz de recaudar sin frustrar la iniciativa y la inversión. En tal sentido, proponemos reactivar el proyecto de **rebaja compensada del impuesto de primera categoría** bloqueado por la derecha, reduciendo la carga sobre las empresas que generan empleo y producción y elevándola para las personas de mayores ingresos, especialmente aquellas que eluden sus obligaciones ocultando esas rentas en complejas arquitecturas societarias. Evaluaremos asimismo el tratamiento tributario de conglomerados económicos, así como de utilidades extraordinarias en industrias cuyas regulaciones garantizan ya un retorno razonable sobre el capital, la incorporación de incentivos tributarios a empresas que se instalen en territorios rezagados, revisar exenciones innecesarias e impuestos que gravan el consumo de bienes que afectan el medioambiente o la salud de las personas. Todo en un contexto de un continuo esfuerzo por hacer más eficiente el quehacer del Estado.

Junto con lo anterior, **garantizaremos un régimen tributario permanente para las micro, pequeñas y medianas empresas que estimule su formalización, reconozca sus capacidades y limitaciones, aporte seguridad social, y les permita crecer y disputar el terreno a las grandes empresas establecidas.** Para ello será necesario darles acceso a incentivos tributarios a la innovación, así como los instrumentos para materializarla. Impulsaremos un programa nacional de acceso de las MIPYME a energías renovables, electromovilidad y digitalización. Además, fortaleceremos la propuesta de ruta del emprendimiento presentada por el gobierno del Presidente Boric, que facilita el proceso de formalización, así como de operación renta, junto con incorporar seguridad social a los dueños MIPYMEs dado el pago de las obligaciones tributarias.

La ciencia y la tecnología es otro pilar fundamental para avanzar hacia un desarrollo sostenible, equitativo y competitivo. Su fortalecimiento es clave para superar brechas estructurales, responder a desafíos globales y locales, diversificar la economía y mejorar la calidad de vida de la población. Por eso:

- **Crearemos un crédito tributario que impulse la innovación, para la diversificación productiva.** La inversión en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) en sectores estratégicos como la minería, la energía, la agroindustria, la salud y la economía digital permite que aumenten su eficiencia, sustentabilidad y valor agregado.

- **Impulsaremos la innovación abierta para fortalecer la integración productiva y encadenamientos de valor.** Un potencial clave de la ciencia y la tecnología es su capacidad para integrar mejor las actividades económicas mediante encadenamientos productivos hacia atrás y hacia adelante. Esto permite aprovechar mejor los recursos naturales y fortalecer las potencialidades regionales; dando respuesta a desafíos globales y locales como la escasez hídrica y los desastres naturales; buscando soluciones en áreas como producción limpia, eficiencia energética, gestión de riesgos y adaptación territorial.
- **Educación, talento y cultura científica.** El desarrollo científico requiere de una fuerte inversión en capital humano, el fomento de vocaciones en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), y el fortalecimiento del sistema educativo. Ello, además, requerirá una **radical transformación al SENCE** para que adecue su formación a las nuevas necesidades de las empresas y los trabajadores, junto con profundizar procesos de capacitación que garanticen la colocación laboral o el aumento de salario como consecuencia de la mayor productividad que la capacitación genere.

Infraestructura para un Desarrollo Inclusivo y Sostenible. Retomaremos el impulso a la inversión en infraestructura que permitió a Chile importantes avances en este ámbito durante los últimos 35 años, consolidando una red de carreteras modernas, aeropuertos funcionales, puertos eficientes y servicios sanitarios reconocidos internacionalmente, además de un **Plan Nacional de Conectividad Digital** con foco en fibra óptica y 5G rural. Hoy contamos con una agresiva agenda de concesiones para los próximos tres años, las cuales suman US\$ 12bn. La infraestructura permite generar empleo, superar brechas, integrar territorios dentro del país y con países vecinos, y generar oportunidades de desarrollo comercial, social y de turismo; además de aumentar la productividad.

Se debe acelerar esta agenda de concesiones y apoyar al sector privado en buscar financiamiento y facilitar la materialización de estas inversiones. Para ello, requerimos una visión estratégica de la infraestructura y ejecutarla desde el Estado, en colaboración con el sector privado para fortalecer las bases de un país más justo, resiliente y conectado. De allí que nuestro **ambicioso plan de infraestructura**, que ayudará a fortalecer las propuestas del programa de primarias de Jeannette Jara, busca:

- **Ciudades más equitativas y menos segregadas:** una infraestructura bien planificada y valorada por la ciudadanía. Seleccionaremos 15 ciudades de tamaño intermedio en todo el país, para transformarlas en ciudades modelo en calidad de vida y vitalidad productiva. Se habilitarán nuevos territorios para vivienda, transporte, servicios (agua, energía, telecomunicaciones), servicios públicos (áreas verdes, comercio, recreación, otros), y la creación de polos tecnológicos públicos con incubadoras, coworks, alianzas público-privadas y apoyo a la innovación joven.
- Se densificarán las zonas aledañas a las estaciones de metro y de trenes suburbanos de modo de poder ofrecer vivienda con buena accesibilidad y con mecanismos que incentiven a la permanencia de los habitantes históricos en su territorio. Además de extender el Metro de Santiago y Valparaíso y crear el Metro para el Bío-Bío (Concepción) y Trenes suburbanos para Antofagasta-Mejillones, Puerto Montt-Llanquihue y el Tranvía Serena-Coquimbo. También los Teleféricos Iquique-Alto Hospicio, Valparaíso, Talcahuano.
- **Logística eficiente y resiliente:** Inversión en puertos, aeropuertos, carreteras, autopistas y ferrocarriles para fortalecer la conectividad y competitividad nacional. Integraremos estas infraestructuras para que nuestros productos lleguen a su destino con el mínimo de controles intermedios.

Especial atención se brindará a la pavimentación de Regiones más pobres, con 500 km anuales. Además, se ampliará y mantendrá la categoría de la red vial concesionada del país (3300 km de la red), asegurando su adecuada coordinación con la red secundaria.

Nuevas inversiones en Trenes en Chillán Concepción (por Ruta del ITATA), Concepción-Laja, Temuco Padre Las Casas, Puerto Montt-Llanquihue, Talca Constitución, Victoria-Temuco- Padre Las Casas y Santiago- Calera-Valparaíso, como también la ampliación de los puertos para hacer frente a nuestros desafíos de comercio exterior en San Antonio, Valparaíso, Iquique, Antofagasta, Coquimbo, Puerto Montt y Punta Arenas, además de explorar la posibilidad de crear nueva infraestructura portuaria en regiones postergadas como La Araucanía. Fortaleceremos la conectividad Austral (barcazas e infraestructura de embarque) y los aeródromos y helipuertos regionales en zonas apartadas.

Adaptación a la crisis climática: Garantizar el acceso a recursos hídricos, proteger las cuencas y promover la desalinización.

Para lograr todo lo anterior es indispensable **avanzar hacia un gobierno más eficiente, para lo cual impulsaremos:**

- **Delegación de facultades al Ejecutivo para modernizar la administración**, reduciendo duplicaciones, fusionando entidades, aprovechando sinergias, simplificando estructuras y procesos.
- **Unidad de Gestión de Inversiones Estratégicas**, bajo la Presidencia de la República para agilizar permisos en proyectos estratégicos, reduciendo en un 50% los tiempos de tramitación sin afectar el interés público. También que busque eliminar normativas redundantes o ineficaces.
- **Integración de bases de datos, para eliminar trámites innecesarios, agilizar procedimientos y erradicar abusos** desde y hacia el Estado.
- Aplicación de **Inteligencia Artificial en procedimientos públicos**, eliminando la discrecionalidad, aumentando la transparencia y la predictibilidad y minimizando el riesgo de corrupción.
- **Auditorías ex post**. Sustituir el control ex ante por evaluaciones posteriores realizadas por la Contraloría.
- **Continuidad de procesos públicos**. Permitir que inversiones o acciones financiadas por el Estado continúen si una licitación resuelta fallida.

2. Una vida digna para todos nuestros compatriotas.

Un aumento de las perspectivas de crecimiento debe llevar aparejada una mejora en las condiciones de vida para la mayoría de la población; solo así esta ganará confianza en los pactos sociales que se logren; lo que fortalecerá la gobernabilidad y el propio crecimiento. La experiencia de los gobiernos de centro izquierda demuestra que la mejor manera de crecer de manera inclusiva es generando buenos empleos; formales, productivos y bien remunerados.

En esta línea, para asegurar una vida digna a todas y todos y superar la pobreza; el programa de primarias de Jeannette Jara proponía la creación de un salario vital de \$750.000 que permitiera financiar las necesidades esenciales de la familia. Al respecto, compartimos la idea de que toda familia acceda a un ingreso que le permita tener una vida digna; sin embargo, no creemos que un aumento sustancial en el salario mínimo, a todo evento, sea

el camino para lograrlo. El actual salario mínimo ya está cerca de lograr financiar la canasta más exigente del reciente informe de la comisión de pobreza (sin considerar arriendo imputado). Por otra parte, el ingreso promedio del quintil más pobre está en torno a los \$300.000; lo que da cuenta que una muy baja proporción de este grupo (que es el que está en pobreza) recibe el actual salario mínimo. Por lo tanto, un alza en este salario no los beneficiaría. Aún más, dado que su problema es de desempleo (solo la mitad tiene empleo) e informalidad (el 35% está en esa categoría); un alza significativa en el salario mínimo podría agravar su situación.

En el actual escenario, la mejor fórmula para superar la pobreza es la generación de empleo complementado con transferencias hacia ese grupo. El diseño de esas transferencias debiese buscar estimular el empleo formal total y respetar la regla fiscal. En esa línea, **valoramos las recientes declaraciones de la propia candidata**, en orden a que el crecimiento será una prioridad en su futuro gobierno, y a que el objetivo en materia salarial será “avanzar a una forma que permita que las familias puedan vivir”, más que insistir en fijar un guarismo concreto.

Respecto del salario mínimo, por muchos años y con el acuerdo de la CUT y la CPC, este se reajustó de acuerdo con la productividad y la inflación esperada. Creemos necesario recuperar esa regla de reajustabilidad que establezca mecanismos claros de reajuste, para que el salario mínimo siga creciendo de manera coherente con el comportamiento de la economía. A ello se puede sumar un crecimiento en las prestaciones que el Estado le brinda a estos grupos, de tal manera que sumadas al salario se logre un ingreso vital. Así, el objetivo del Estado será alcanzar dichas metas en el menor tiempo posible.

Avanzar hacia un mercado laboral más formal y protegido es una condición indispensable para el desarrollo económico inclusivo en Chile. Según la Encuesta Nacional de Empleo del INE, al cuarto trimestre de 2024, la tasa de informalidad laboral alcanzo el 26,4%, lo que está compuesto casi en igualdad de proporciones por trabajadores por cuenta propia y trabajadores dependientes. La evidencia muestra que la formalización laboral incrementa el ingreso permanente del hogar, mejora la estabilidad económica y permite acceder a instrumentos clave de movilidad social, como la protección social y capacitación y la previsión.

Una barrera importante para la formalización laboral en Chile proviene de la percepción -frecuentemente errónea- de que ingresar a un empleo formal o

regularizar un emprendimiento conllevará una pérdida automática de beneficios sociales, debido a un eventual aumento en el puntaje del Registro Social de Hogares (RSH). Esta percepción atemoriza a muchas familias, que prefieren percibir ingresos en la informalidad con tal de no perder apoyos clave como la gratuidad en educación superior o subsidios de vivienda limitando la movilidad social. Para enfrentar este problema, se debe garantizar el mantenimiento de las prestaciones sociales por un período de hasta cuatro años para todas aquellas personas que se inserten en empleos dependientes formales o formalicen sus actividades económicas como trabajadores por cuenta propia, eliminando desincentivos implícitos a la formalización.

Junto a la propuesta de ajuste del salario mínimo y formalización del mercado laboral se deben generar condiciones para aumentar el empleo formal, reducir el desempleo y aumentar la participación laboral. La tasa de participación promedio de Chile se sitúa en 64,2% (promedio OCDE=70%). Lo anterior es más preocupante en mujeres, jóvenes y sectores menos educados. La porción considerable de la población en edad de trabajar que permanece fuera del mercado formal queda marginada de los avances en materias sociales y redistributivas del país. Incentivar a que más personas se integren al mercado laboral, mejorando las condiciones estructurales que las mantienen fuera, no solo mejorará sus condiciones de vida; sino además será un importante impulso para el crecimiento económico. Al respecto proponemos:

- Fortalecer la participación femenina en el trabajo calificado y bien remunerado, expandiendo el **Sistema Nacional de Cuidados** que permita a más mujeres incorporarse y permanecer en el mercado laboral en condiciones de equidad y estableciendo un posnatal paternal irrenunciable.
- **Reforma al sistema de sala cuna**, activando la tramitación de la normativa que se discute en el Congreso Nacional, con el objeto de eliminar la barrera de contratación de la “mujer número 20”, y extender el beneficio de sala cuna a hijos de trabajadores hombres y a trabajadoras y trabajadores informales.
- Apoyo a la **empleabilidad de jóvenes y adultos mayores**, facilitando el empleo a jornada parcial y estableciendo incentivos a la contratación.

- Nuevos mecanismos para **proteger el derecho a la no discriminación y maltrato laboral**, evaluando la aplicación efectiva de la normativa que se ha ido desarrollando en la materia.
- **Reestructuración del sistema de capacitación**, para que les entregue herramientas efectivas a los trabajadores para adaptarse a los nuevos sectores productivos y a la transformación tecnológica del mundo del trabajo. Capacitación en habilidades técnicas y digitales. Instituciones público-privadas enfocadas en formación técnica en minería, hidrógeno, energías renovables y digitalización industrial. Se formarán 100.000 programadores para desarrollar la industria digital y sus aplicaciones a procesos productivos y servicios.
- **Reducción de la informalidad** por debajo del 20%, a través de mecanismos simplificados y amigables para la formalización del emprendimiento (cubierto en otros puntos) y de acceso a la seguridad social, así como sancionando los mecanismos de elusión de las obligaciones tributarias y laborales de los empleadores.
- **Una nueva política de ingresos para la familia trabajadora.** Considerando para ello el ingreso mínimo legal, las asignaciones y subsidios familiares y las transferencias monetarias. Transitar hacia una tasa impositiva por grupo familiar más que por individuo. Reactivaremos el Bolsillo Familiar Electrónico, para que permita reducir el costo de los alimentos y consumos básicos de la familia, transformándolo en parte integral de la política social del Estado. El Registro Social de Hogares se utilizará como un instrumento exclusivo para la caracterización de las familias, con el objetivo de evitar su manipulación para acceder a beneficios sociales. Esto evitará dos problemas actuales: una caracterización incorrecta de la población y una asignación ineficiente de las prestaciones sociales. A su vez, se emplearán otros índices específicos para la asignación de beneficios, como el Puntaje de Focalización Previsional en el caso de la PGU o el Formulario FUAS para las becas de educación superior.
- **Fortalecimiento del actual Consejo Superior Laboral**, como un espacio privilegiado de diálogo social tripartito entre empleador, trabajador y gobierno, dotándolo de más funciones y facultades vinculantes.

- **Extender la cobertura del seguro de cesantía a un período de hasta nueve meses.** Para otorgar mayor estabilidad económica a las personas mientras buscan una nueva fuente de empleo, permitiendo no solo reducir la vulnerabilidad de los trabajadores, particularmente en sectores con alta rotación o empleo precario, sino también mejorar la calidad del emparejamiento laboral, al facilitar la búsqueda de empleos más adecuados a las competencias, experiencia y expectativas de los cesantes, mejorando a su vez –según estudios internacionales- los niveles de salario y estabilidad contractual en el mediano plazo.

3. Responsabilidad y sostenibilidad de la política fiscal.

Esta es una materia que se puede fortalecer en el programa y que es esencial para lograr los dos objetivos anteriores de manera sostenible. Creemos indispensable que el programa respete de manera estricta el principio de responsabilidad fiscal ateniéndose a la regla fiscal dual existente. Esto es lograr la estabilización de la deuda pública en torno a 41% del PIB, y alcanzar un balance estructural de cero hacia fines de la década. La mantención de finanzas públicas ordenadas no solo evidencia una gestión técnicamente adecuada, sino que es condición necesaria para sostener políticas sociales permanentes, fomentar la inversión y proteger la autonomía de las generaciones futuras.

Lo anterior plantea perspectivas fiscales de significativa estrechez e implica que el crecimiento del gasto público no puede exceder de 1.3% anual promedio por todo el cuatrienio. Esto, bajo el supuesto de que la Ley de Cumplimiento Tributario rinda en torno a 1,2% de más ingresos netos hacia el 2029. Este escenario es extraordinariamente desafiante dado que esa trayectoria de gasto público debe absorber significativas demandas ciudadanas en salud, pensiones (PGU) y seguridad. Por ejemplo, las estimaciones recientes del CFA indican que el gasto en la PGU pasará de un 2% del PIB actualmente a un 7% en 2050, si crece al ritmo de los salarios reales. Esto es equivalente aproximadamente a 1% del PIB en el próximo quinquenio. Por el lado de salud, proyecciones realizadas por la DIPRES sugieren que en el transcurso de 25 años hasta el 2050, el gasto como % del

PIB se incrementaría entre 2 y 3% del PIB. En suma, considerando sólo los compromisos en pensiones y salud, se puede evaluar una presión de mayor gasto entre 1% y 2% del PIB para el próximo quinquenio.

Por otro lado, si el incremento en los ingresos tributarios netos provenientes de la Ley de Cumplimiento Tributario no rinde lo esperado, y la recaudación tributaria se mantiene en torno a 19% del PIB, incluso una trayectoria de gasto público como la señalada no garantiza la estabilización de la deuda en un nivel prudente, sino que un continuo incremento, que pone en riesgo mantener este compromiso recientemente instaurado y clave para la credibilidad fiscal del Estado.

De estos ejercicios de escenario fiscal y crecimiento se deducen ciertas conclusiones:

- Toda decisión administrativa y legislativa que permita destrabar y adelantar inversiones es más necesaria que hace unos años. Alcanzar cifras de crecimiento potencial de 2.5%, o cercanas a 3%, son condición necesaria, pero no suficiente para darle sostenibilidad de mediano plazo a las finanzas públicas. Existe amplio consenso en empujar esta agenda y ello se debe mantener en el tiempo.
- Países exitosos crecieron en 2,9% anual cuando tenían el nivel de desarrollo de Chile y condiciones externas y demográficas más favorables que las que el país tiene en la actualidad. Es posible apuntar a eso, pero se requiere forjar consensos importantes en las definiciones fiscales y de políticas pro-crecimiento. No se deben seguir los cantos de sirena que dicen que esto es fácil.
- El espacio fiscal para ampliación de programas existentes o creación de nuevos programas es extremadamente reducido. Más bien, la realidad es que el encuadre fiscal plantea opciones difíciles para adelante. Priorizar y ser más eficientes es nuestra tarea central.
- En lo inmediato, la discusión en el Congreso de las medidas correctivas planteadas por el Ministerio de Hacienda, así como la Ley de Presupuestos, debe apoyar resueltamente y de forma transversal la necesidad de una señal clara de que existe voluntad entre el Congreso y el Ejecutivo de la necesidad de la sustentabilidad fiscal.

De lo anterior se establece que las medidas contempladas en el programa de gobierno deben estar financiadas en el 100% con ingresos permanente

disponibles en el Estado. En caso de que se contemplen nuevas medidas que irroguen un mayor gasto público, se debe especificar qué recortes en el actual gasto se realizaran o a que medidas de mayor recaudación estarán condicionadas.

Una manera de generar holgura fiscal es la eficiencia y reducción del gasto público mediante la modernización y automatización -con el uso de inteligencia artificial- en el Estado, lo que requiere una transformación estructural en la forma en que el Estado opera y presta servicios. En este sentido, la automatización de procesos administrativos repetitivos constituye una herramienta clave para reducir costos operativos, disminuir tiempos de respuesta y minimizar errores o duplicidades. Así los costos de administración del Estado como administración y finanzas de los servicios públicos, el pago de remuneraciones y viáticos se podrían automatizar y pagar de manera centralizada liberando personal de tareas repetitivas^[1]. Esto permitiría destinar más recursos a programas públicos. Además, existen duplicaciones de funciones entre diversos servicios (por ejemplo, servicios de bienestar o departamentos de informática) que se podrían unificar de manera ministerial mejorando así los costos de administración.

Junto a lo anterior promoveremos:

- **Pacto contra el fraude social, tributario y mal gasto público.** Convocar un grupo plural para proponer reformas que eliminen situaciones como las licencias falsas, mal uso de beneficios, sobreprecios en compras públicas y evasión o elusión tributaria.
- **Medidas de cumplimiento tributario.** Fiscalizaciones que aseguren el pago justo de impuestos, priorizando áreas donde existe espacio para mejorar la recaudación.
- **Un Estado transparente y anticorrupción,** que se logra con un Sistema de Cumplimiento Normativo. Oficiales de Cumplimiento con procedimientos internos, mapas de riesgo y capacitación. Transparencia y acceso a la información. Digitalizar datos sobre contrataciones, presupuestos y adquisiciones. Tecnología para integridad pública. Uso de IA y big data para detectar irregularidades, trazabilidad del gasto y alertas tempranas. Crear un Sistema Nacional de Inteligencia Financiera que integre UAF, SII, Aduanas y PDI, permitiendo investigaciones más ágiles.

También es indispensable fortalecer la Descentralización y desarrollo territorial:

- **Descentralización de Funciones.** Dejaremos atrás la transferencia de competencias puntuales a los gobiernos regionales para pasar al traspaso de áreas más amplias de política pública donde se puedan traspasar servicios o ámbitos de responsabilidad, particularmente en materias como desarrollo productivo, especialmente turismo, ordenamiento territorial, servicios ligados al territorio como tránsito, transporte público y gestión de parques o prevención situacional del delito.
- **Descentralización Fiscal.** Crear un sistema de rentas regionales y coparticipación fiscal con fondo de convergencia.
- **Evaluación de la gestión local/regional.** Establecer estándares de servicio, transparencia y participación ciudadana con indicadores que permitan su evaluación.
- **Modificar el sistema de convenios anuales entre el gobierno central y los municipios,** que provoca discontinuidad y altos costos administrativos, para reemplazarlo por un sistema de convenios plurianuales.
- **Nueva Ley de Rentas Municipales** que aumente el aporte de las comunas más ricas en favor de las más pobres y rurales, haciendo más ágil y equitativo el sistema de patentes comerciales, mejorando los sistemas de rendición de cuenta y participación ciudadana y fortaleciendo la fiscalización de la gestión financiera y de personal.
- **Mecanismo de financiamiento complementario para municipios** rurales y fronterizos que permita comenzar a reducir los grandes rezagos que éstos enfrentan.
- **Modificación de Estatuto de los Funcionarios Municipales** para facilitar la movilidad entre municipios ampliando las posibilidades de carrera y desarrollo profesional.

4. Chile debe fortalecer la sindicalización y avanzar gradualmente hacia la negociación multinivel.

La sindicalización es una herramienta esencial para equilibrar las relaciones laborales, mejorar las condiciones de trabajo y promover un diálogo social más sólido y democrático. En Chile, la baja tasa de sindicalización y la dispersión de las organizaciones limitan la capacidad de incidencia de los trabajadores, debilitando su voz en los procesos de negociación colectiva y en la formulación de políticas laborales. **Por ejemplo, la cobertura de**

negociación colectiva en Chile es menor, en torno al 20%, al promedio de 32 % de los países de la OCDE. Fortalecer la sindicalización no solo contribuye a una mejor distribución de beneficios económicos, sino que también genera confianza entre empleadores, trabajadores y el Estado, promoviendo relaciones laborales más estables y justas.

Para lograrlo, es necesario un plan integral que combine reformas legales, modernización organizativa e incentivos reales que den a la afiliación sindical un valor económico y social tangible. Esto implica simplificar la constitución de sindicatos, reforzar la protección frente a las prácticas antisindicales y fortalecer los programas de capacitación dirigidos a los dirigentes. Asimismo, resulta clave fomentar redes de colaboración entre sindicatos de un mismo sector para evitar la dispersión y promover o fortalecer espacios tripartitos, tanto a nivel nacional como sectorial, que generen confianza entre los actores y fortalezcan la capacidad de incidencia de los trabajadores organizados. En secciones anteriores se proponen nuevos espacios de diálogo social y de incidencia de los trabajadores organizados.

En el actual escenario la negociación ramal en Chile enfrenta un obstáculo estructural que no puede ignorarse: la profunda heterogeneidad de su economía. En un mismo sector coexisten grandes empresas altamente productivas, con acceso a financiamiento y tecnología, junto a micro y pequeñas empresas que operan con márgenes estrechos y baja productividad. Esta disparidad hace que cualquier acuerdo sectorial que fije estándares comunes, como salarios o condiciones laborales, sea sostenible para las grandes compañías, pero potencialmente inviable para las más pequeñas, que quedarían en desventaja competitiva.

A esta diversidad productiva se suma la alta informalidad laboral en ramas como el comercio, la agricultura o el transporte. Una parte importante de los trabajadores carece de contratos formales, lo que limita la cobertura real que podría alcanzar una negociación a nivel sectorial.

Las diferencias territoriales también son significativas. Las condiciones laborales en la construcción o la minería del norte no son las mismas que en la zona centro-sur, lo que evidencia que un convenio único para todo el país difícilmente reflejaría las realidades locales. A esto se suma la dispersión sindical: la afiliación se concentra en pocos sectores, mientras que en otros es mínima y fragmentada, dificultando encontrar interlocutores representativos a nivel sectorial.

En este contexto, avanzar hacia la negociación multinivel en Chile requiere un proceso gradual y ordenado, adaptado a la realidad nacional. En una primera etapa es indispensable fortalecer la base sindical. También es importante promover la formación de federaciones por rama productiva que articulen sindicatos de un mismo sector, así como desarrollar programas de formación para dirigentes que les permitan enfrentar procesos de negociación más complejos. Finalmente, la instalación de mesas tripartitas de diagnóstico sectorial contribuirá a generar consensos y lineamientos que orienten futuras negociaciones.

Lo anterior debe hacerse asegurando que la mayor participación de las organizaciones de trabajadores en las trayectorias de las empresas no afecte de manera negativa la productividad del país; por lo que también es necesario establecer mecanismos legales que regulen cada paso de la participación. Este camino permitirá avanzar con gradualidad, flexibilidad y respaldo institucional, asegurando un modelo sostenible y coherente con las particularidades del contexto chileno.

[1] Cabe recordar que el pago centralizado en el gobierno central de las facturas ya se hace mediante la Tesorería General de la República, por lo que esto sería una profundización de esta iniciativa.